

Bien concedido por las causales 1 y 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal

Corresponde admitir a trámite para determinar si el riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso pueden ser objeto de pronunciamiento en una excepción de improcedencia de acción y para analizar si ha seguido la línea jurisprudencial establecida en la Casación n.º 1307-2019/Nacional.

Lima, tres de octubre de dos mil veintidós

AUTOS y VISTOS: el recurso de casación interpuesto por la defensa del procesado **Oscar Alberto Torres Morales** contra el auto de vista del nueve de agosto de dos mil veintiuno (foja 83), expedido por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que confirmó el auto del veintiuno de abril de dos mil veintiuno (foja 46), que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción deducida en la investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

I. Fundamentos del recurrente

Primero. La defensa del procesado Oscar Alberto Torres Morales invocó el recurso de casación excepcional concordante con los numerales 1 y 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal. Expresó los siguientes argumentos:

1.1. Respecto a la causal prevista en el numeral 1, señaló que el auto impugnado importa una inobservancia del precepto

constitucional y una vulneración de la garantía de motivación en lo que respecta a los alcances de la excepción de improcedencia de acción y su relación con criterios de imputación objetiva, toda vez que se le imputó el Hecho n.º 3 consistente en que en su condición de gerente de la empresa “Almacenes Huánuco” adquirió bolsas de azúcar de la empresa Corporación SIR SAC y emitió para ello las boletas 2264 y 2272, esto es, se le imputa ser autor del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia, así como ocultamiento y tenencia, en razón de lo cual se dedujo la excepción de improcedencia de acción sobre la base de los criterios de imputación objetiva (riesgo permitido, prohibición de regreso y principio de confianza), pues el solo hecho de haber adquirido, en su condición de gerente, las bolsas de azúcar no generó ningún riesgo penalmente relevante, tanto más si para la compra se emitieron las respectivas facturas, por lo que debe excluirse su accionar del ámbito jurídico penal.

- 1.2.** La Sala Superior inobservó la Casación n.º 1307-2019/Nacional, en cuanto a los alcances de la imputación objetiva del delito de lavado de activos, por cuanto el único argumento por el cual desestimó el pedido de la defensa es la verificación del valor pagado por las bolsas de azúcar —acorde al mercado o no—; sin embargo, para ello no se requeriría actuación probatoria a nivel fiscal, pues bastaría un sustento empírico como el siguiente: se pagó en total S/ 63 200 (sesenta y tres mil doscientos soles) por 800 bolsas de azúcar; así, al hacer una división se pagó S/ 79 (setenta y nueve soles) por cada bolsa de azúcar en octubre de 2014; por lo que atendiendo a que la compra fue al por mayor en el mercado nacional, sí fue un precio razonable; en este sentido,

para dicha conclusión no se requiere valoración probatoria, sino un sustento práctico que sí está permitido en una excepción de improcedencia de acción, conforme lo ha señalado lo Casación n.º 1307-2019/Nacional.

- 1.3.** Existe interés casacional en la necesidad de reafirmar —conforme a la Casación n.º 1307-2019/Nacional— que en los delitos de dominio, como el lavado de activos, se debe tener presente para los efectos del juicio de imputación objetiva no solo la realización de un riesgo penalmente relevante, sino también si su creación puede imputar penalmente al que lo ha producido o pudo evitarlo (alcances de la excepción de improcedencia de acción y su relación con los criterios de imputación objetiva).
- 1.4.** Se justifica en que no existe ningún filtro para el inicio de una investigación por lavado de activos, como si lo hay en los delitos tributarios; ello es la causa de innumerables casos de lavado de activos sin ningún sustento fáctico que evidencie un riesgo penalmente relevante; de esta manera, al sobreseerse, en el futuro solo generan gastos en cuanto a la persecución del delito y la programación de audiencias.
- 1.5.** Pretende que en estos casos los jueces necesariamente deben evaluar la imputación desde los alcances de la imputación objetiva, no eludir tal análisis con simples argumentos como el requerir valoración probatoria para aspectos que pueden dilucidarse con argumentos de justificación y de sustento empírico, como también lo señaló la Casación n.º 1307-2019/Nacional, toda vez que es la única forma de evitar abusos por parte del Ministerio Público en cuanto a la continuación de investigaciones sin la evidencia de un riesgo penalmente relevante; y, en efecto, generar en el ciudadano preocupación

y gastos cuando se encuentra comprendido en dichos supuestos.

II. Cuestiones generales sobre el recurso de casación

Segundo. El recurso de casación es un remedio extraordinario por el que se acude a la Corte Suprema de Justicia de la República con la finalidad de que se revise la aplicación de leyes materiales y procesales. Ello significa que con este recurso no se puede objetar el enjuiciamiento fáctico ni sustituirse el examen de los medios probatorios realizados en la Sala Penal Superior¹. Asimismo, es un mecanismo de control de la observancia de los principios, los derechos fundamentales, los bienes y los valores constitucionales, la supremacía constitucional y la unificación de la interpretación penal y procesal².

2.1. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento y los que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena, o denieguen la extinción, la conmutación, la reserva o la suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores, conforme establece el inciso 1 del artículo 427 del Código Procesal Penal; asimismo, dicha procedencia está sujeta a las limitaciones que establece el numeral 2 del acotado artículo, entre ellas, que el delito más grave al que se refiera la acusación

¹ SAN MARTÍN CASTRO, César. (2015). *Derecho procesal penal. Lecciones*. INPECCP, p. 710.

² En cumplimiento del derecho a la igualdad, en su vertiente formal, y específicamente en su componente de igualdad “en la aplicación de la ley”, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a unificar los criterios jurisdiccionales y las interpretaciones del ordenamiento jurídico como medio de interdicción a la arbitrariedad en un Estado social y constitucional de derecho; tal labor recae, principalmente, en la Corte Suprema de Justicia de la República como última instancia de la jurisdicción ordinaria.

fiscal tenga señalada en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años.

- 2.2.** Excepcionalmente, también puede interponerse el recurso de casación, en contra de otras resoluciones emitidas por las Salas Penales Superiores, solicitando el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, según establece el inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal, que prevé la denominada "casación excepcional".
- 2.3.** Las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, al calificar los recursos de casación propuestos, analizan discrecionalmente la pretensión de los recurrentes y evalúan si es necesario el caso para desarrollar la doctrina jurisprudencial nacional.
- 2.4.** Sobre el particular, este Supremo Tribunal, en la Casación n.º 17-2010/Cañete, precisó lo siguiente:

La norma procesal ha regulado la casación excepcional en el inciso cuatro, del artículo cuatrocientos veintisiete, del citado Código, que permite al Supremo Tribunal, excepcionalmente, y superando las barreras de las condiciones objetivas de admisibilidad, que pueda aceptarse el recurso de casación, pero sujeto a que se estime imprescindible para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, y que el recurrente consigne adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende, con arreglo al apartado tres, del artículo cuatrocientos treinta, del Código Procesal Penal.

- 2.5.** Asimismo, en la Queja n.º 66-2009/La Libertad, se estableció lo siguiente:

La valoración que ha de realizar la Sala de Casación, más allá de su carácter discrecional, ha de circunscribirse a la presencia de un verdadero interés casacional; esto es: **i)** Unificación de interpretaciones

contradictorias

—jurisprudencia contradictoria entre diversos órganos jurisdiccionales—, afirmación de la existencia de una línea jurisprudencial o de jurisprudencia vinculante de la máxima instancia judicial frente a decisiones contrapuestas con ella expedidas por tribunales inferiores, o definición de un sentido interpretativo a una norma reciente o escasamente invocada pero de especiales connotaciones jurídicas. **ii)** La exigencia ineludible, por sus características generales, más allá del interés del recurrente, de obtener una interpretación correcta de específicas normas de Derecho Penal y Procesal Penal.

III. Análisis del caso

Tercero. Revisado el recurso de casación propuesto por la defensa del procesado Oscar Alberto Torres Morales, según lo dispuesto en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 430 del Código Procesal Penal, tenemos lo siguiente:

- 3.1.** El recurrente ejerce legitimidad para interponer el recurso y ha cumplido con las formalidades de ley requeridas, esto es, lo ha interpuesto de forma escrita y dentro del plazo de ley; ha precisado los puntos a los que se refiere con indicación de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyan; así, también ha formulado una pretensión concreta consistente en que se case el auto de vista y sin reenvío se lo revoque, y al reformarlo se declare fundada la excepción de improcedencia de acción.
- 3.2.** No obstante, es preciso señalar que los delitos por los que se procesa al recurrente tienen el extremo mínimo de la pena superior a los seis años de pena privativa de libertad, esto implica que únicamente puede recurrirse en vía casación como un recurso ordinario.

3.3. El recurrente invoca la Casación n.º 1307-2019/Nacional, que señala:

1. la excepción de improcedencia de acción se sustenta en la noción de carencia de una pretensión punitiva válida pues los hechos atribuidos al imputado –la causa de pedir– no constituyen un injusto penal o no corresponde la aplicación de una pena (está referido a tres categorías del delito: tipicidad, antijuricidad y punibilidad); es decir, carece de relevancia jurídico penal. 2. En los delitos de dominio, como el de lavado de activos, es de tener presente no solo la realización de un riesgo penalmente relevante, concretado en lo arriba expuesto (riesgo penalmente prohibido a cargo de López Melgarejo de Costa) –dato normativo no cuestionado al deducirse la excepción de improcedencia de acción–, sino también si su creación puede imputarse penalmente al que lo ha producido o pudo evitarlo. Es en este último punto donde, entre otros, el principio de confianza se erige como institución imprescindible. 3. La competencia por el riesgo prohibido no necesariamente debe corresponder al titular del ámbito de organización del que se deriva fácticamente el riesgo prohibido (la encausada López Melgarejo de Costa), sino que puede recaer también sobre terceros –en este caso el esposo (Costa Alva), quien fue el que, según los cargos, habría efectuado maniobras delictivas para obtener los activos que se le transfirió–. Tratándose del principio de confianza, como el desarrollo del suceso depende de otras personas –presupuesto de su aplicación–, se exige establecer si se mantiene la confianza del tercero o si ésta decae.

3.4. Sobre el particular, la Sala Superior entre sus fundamentos expresó:

queda claro, que la conducta imputada a la persona de Oscar Alberto Torres Morales por la presunta comisión de lavado de activos en agravio del estado si tipifica en el delito antes mencionado, y si con el solo hecho de saber que es empresario, que ha abonado, que se han emitido facturas, podríamos decir en efecto declarar fundada esta excepción, no obstante nos queda claro por lo marcado en la propia

imputación que en efecto el precio pagado sea el adecuado, el del mercado que esté por encima o por debajo, tampoco podemos por la sola mención en la imputación considerar que es un proveedor del estado, porque ahí si tendríamos la necesidad de evaluar elementos convencionales, y eso no lo permite la excepción por tratarse precisamente de una defensa de fondo, es decir el argumento de la defensa, en cuanto a la forma nos parece correcto; sin embargo si se requiere de análisis probatorio.

- 3.5.** Sobre la base de ello, corresponde admitir a trámite para determinar si el riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso pueden ser objeto de pronunciamiento en una excepción de improcedencia de acción y para analizar si se ha seguido la línea jurisprudencial establecida en la Casación n.º 1307-2019/Nacional, esto es, admitir a trámite por las causales 1 y 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

- I. DECLARARON BIEN CONCEDIDO** el recurso de casación (por las causales 1 y 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal) interpuesto por la defensa del procesado **Oscar Alberto Torres Morales** contra el auto de vista del nueve de agosto de dos mil veintiuno (foja 83), expedido por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que confirmó el auto del veintiuno de abril de dos mil veintiuno (foja 46), que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción deducida en la investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado.

II. DISPUSIERON que se notifique la presente decisión a los sujetos procesales apersonados en esta instancia, que se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y que se archive el cuadernillo respectivo.

Intervino el señor juez supremo Coaguila Chávez por periodo vacacional del señor juez supremo San Martín Castro.

S. S.

LUJÁN TÚPEZ

ALTABÁS KAJATT

SEQUEIROS VARGAS

COAGUILA CHÁVEZ

CARBAJAL CHÁVEZ

CCH/MAGL